

## Declaración de México

Del 12 al 15 de junio de 1991, tuvo lugar, en la ciudad de México, el II Encuentro de los Movimientos y Partidos Políticos del Foro de São Paulo. En esta ocasión el Foro congregó a 68 organizaciones y partidos políticos provenientes de 22 países que examinaron la situación y la perspectiva de América Latina y el Caribe frente a la reestructuración hegemónica internacional.

La ampliación del número de participantes de la región se complementó con la asistencia de 12 organizaciones y partidos políticos de Europa, Canadá y Estados Unidos. Con la organización de este foro, celebrado por invitación del Partido de la Revolución Democrática de México, se da cumplimiento y continuidad a las resoluciones emanadas del I Encuentro de Organizaciones y Partidos Políticos de Izquierda realizado el año pasado en São Paulo por iniciativa del Partido de los Trabajadores de Brasil, en el sentido de aglutinar a un mayor número de fuerzas políticas interesadas en discutir la actual problemática latinoamericana y en la búsqueda de alternativas viables para enfrentar el reto de las transformaciones que nuestras realidades plantean.

El debate realizado en este II Encuentro ha sido franco abierto, democrático, plural y unitario, con la participación de un amplio abanico de fuerzas. Unas tienen identidades nacionalistas, democráticas y populares, en tanto que varias otras llevan estos conceptos hacia identidades socialistas diversas, estando todas comprometidas con las transformaciones estructurales requeridas para el cumplimiento de los objetivos de las grandes mayorías de nuestros pueblos por la justicia social, la democracia y la liberación nacional.

En el curso del II Encuentro se analizaron y discutieron los impactos económicos, políticos, sociales y culturales de la crisis, producto de la imposición de los llamados modelos neoliberales en nuestra región. Los participantes intercambiaron opiniones acerca de distintos aspectos que se desprenden de la transición democrática; la relación de la democracia con la economía y la sociedad, su vinculación con los derechos humanos, con la soberanía y con la no intervención.

El II Encuentro examinó, asimismo, las estrategias democráticas y populares en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural, así como las experiencias regionales en el ámbito de la integración.

Se aprobaron también diversas resoluciones de solidaridad con las luchas de los pueblos latinoamericanos y caribeños en defensa de la soberanía y por la democracia, el bienestar social y el desarrollo económico.

En ese sentido se consideró tarea primordial de solidaridad la defensa de la soberanía de Cuba y los esfuerzos para frustrar los planes del poder imperialista estadounidense contra la Revolución Cubana. Se destacó la necesidad de defender las conquistas de la Revolución Sandinista amenazadas después de la derrota electoral del FSLN, de apoyar los significativos avances democráticos del pueblo haitiano encarnadas en el gobierno del padre Aristide, de solidarizarse con la lucha del FMLN y demás fuerzas progresistas de El Salvador en la búsqueda de una sólida política negociada que erradique las causas de la guerra, de apoyar la lucha de la URNG de Guatemala y su propuesta de una solución política al conflicto armado sobre bases justas, de respaldar la lucha por la salida de las tropas yanquis de Panamá, de asumir la lucha anticolonial de los puertorriqueños y de los demás pueblos de las colonias del Caribe, de rechazar la intervención militar que bajo el pretexto de la "guerra andina contra el narcotráfico" los EE.UU. practican en Bolivia,

Perú, Ecuador y Colombia y de condenar los fraudes electorales y todas las modalidades de represión.

Asimismo, el II Encuentro expresó su apoyo a la reivindicación de Argentina sobre las Islas Malvinas; su respaldo a la independencia de Martinica y Guadalupe, su adhesión a la campaña de solidaridad contra el cólera en el Ecuador denominada "un barco por la vida" y su rechazo a todas las medidas de impunidad en América Latina frente a los crímenes del militarismo y a las violaciones de los derechos humanos en nuestro continente, en particular, las relacionadas con los desaparecidos, así como, al proceso de cambios y negociación política en Colombia.

La década de los 80, la llamada década perdida para América Latina, fueron años de crisis y reestructuración global de la economía internacional, de las relaciones entre las naciones y de las economías, así como de las relaciones políticas y sociales dentro de cada país.

En esta década se produce el derrumbe de los modelos autoritarios del "socialismo real". En América Latina desaparecieron dictaduras militares en muchos países. En éstos y en otros se abrieron nuevos espacios de participación política, muchas veces en democracias restringidas, permitiendo la gestación, en medio de la crisis, de nuevos movimientos sociales de amplia expresión popular, luchando por reivindicaciones económicas y sociales y por la democracia.

Es en el marco de este proceso que surgen, en algunos países del continente, importantes partidos populares, así como se fortalecen y adquieren mayor arraigo social muchas organizaciones que desarrollaban sus luchas desde décadas precedentes. El avance de estas fuerzas se expresó, en algunos países de América Latina, en la conquista de gobiernos locales, regionales y nacionales.

Globalmente, las fuerzas y movimientos populares, reivindicando o no el socialismo en sus programas, impulsaron en su interior significativos procesos de renovación política y orgánica – que deberán ser impulsados – en creciente articulación con las luchas sociales.

Expresión de este proceso de renovación es el creciente esfuerzo de unidad, la crítica de concepciones dogmáticas y burocráticas y el combate al sectarismo.

La profunda reflexión que hacen las izquierdas y todas las fuerzas democráticas latinoamericanas, plantea la necesidad de ofrecer a la sociedad alternativas concretas en la perspectiva de las clases trabajadoras, las fuerzas democráticas y los intereses nacionales, superando así la simple crítica del sistema capitalista.

Las políticas recesivas de inspiración neoliberal profundizan la crisis política y social de nuestra región causada por el capitalismo dependiente. Dichas políticas van encaminadas a asegurar la transferencia de recursos que la región realiza para cubrir la carga del servicio de la deuda externa. En aras de cumplir con el capital financiero internacional, los gobiernos latinoamericanos agudizan la descapitalización de nuestras economías y los niveles de explotación y miseria de las mayorías. Asimismo, dicha política privilegia los mecanismos del mercado, aparentemente libre, para enfrentar los problemas económicos y la regulación y reestructuración de nuestras economías, favoreciendo a las grandes empresas transnacionales y nacionales que las controlan, en detrimento de los intereses nacionales y populares.

La estrategia predominante se caracteriza por la reestructuración y la reducción del papel del Estado en la economía, sin plantear su necesaria transformación en función de los objetivos nacionales, democráticos, económicos y sociales de las

mayorías. Promueve la privatización y acentúa la centralización del capital y el predominio de las fuerzas transnacionales en la economía, instaurando una indiscriminada apertura externa y mayores niveles de explotación y opresión de la fuerza de trabajo con la reducción de los sueldos y salarios reales, la desprotección en las condiciones laborales y el recorte de los derechos sindicales.

Mientras la participación del Estado fue funcional a las necesidades de acumulación del capital, no fue cuestionada su participación. Hoy en día, ante la necesidad de ampliar la frontera de inversión del capital nacional e internacional, se culpa al Estado de la crisis económica de nuestros países, así como de supuestas "prácticas socializantes" en la economía, por lo que se plantea su reducción o su adelgazamiento para así apropiarse de las empresas estratégicas y prioritarias de alta rentabilidad que el Estado controlaba. Tal situación de privatización relega los principios de soberanía y el cumplimiento de los objetivos nacionales en torno a crecimientos económicos más equilibrados y sostenidos, ya que pasa a predominar el objetivo exclusivo de la alta rentabilidad. Ello lleva a acentuar los problemas existentes con la resultante vulnerabilidad de nuestras economías a los factores externos (mayor inversión extranjera directa, mayores créditos) para el financiamiento de los desequilibrios generados.

Para ello se ha promovido la transformación del aparato jurídico-institucional que rige las relaciones internacionales, entre las cuales destacan: la eliminación de barreras proteccionistas que permitieron la industrialización de nuestros países; la modificación de las leyes de inversión extranjera; la modificación de las leyes laborales para asegurar una mayor explotación de la fuerza de trabajo, así como la modificación de las leyes agrarias para revertir los procesos de reforma agraria y privatizar el campo. Dicho proceso comprende, además de los recursos institucionales, el uso de la violencia contra los movimientos campesinos del continente dado el notable peso que ellos tienen en el movimiento popular y social.

La imposición del neoliberalismo y sus políticas proimperialistas y antipopulares ha sido posible, en buena medida, debido a los controles verticales y a las democracias restringidas predominantes en muchos de nuestros países. En este marco resaltan los fraudes y mecanismos electorales irregulares, la extensión de prácticas venales y corruptas, la represión a los sindicatos y organizaciones sociales independientes, el control de la prensa y los medios de comunicación en la perspectiva de limitar los alcances de las transformaciones democráticas, manipular los anhelos democratizadores de la sociedad, y permitir – con relativa gobernabilidad – la instrumentación de su nuevo esquema de dominación en el que se combina el neoliberalismo con el autoritarismo político y un sistema de impunidad para el abuso y la corrupción de los gobernantes.

También constituyen instrumentos al servicio del neoliberalismo, la supervivencia de las doctrinas de seguridad nacional, la militarización de las sociedades y el creciente rol de las fuerzas armadas y paramilitares en diversos Estados y gobiernos latinoamericanos que se apoyan en estados de excepción y de emergencia y recortan, cada vez más, los derechos democráticos de la población. Asimismo debemos resaltar que en diversos países se han diseñado estructuras políticas en las que los que son electos tienen su capacidad de mandato recortada, pues se superponen instituciones no elegidas a las instancias electivas, limitándoles capacidad de acción para modificar las políticas neoliberales ya impuestas y transformar dichas realidades.

La reestructuración neoliberal ha implicado un proceso de mayor sumisión de los Estados nacionales a los intereses imperialistas de los países desarrollados, lo que

se ha traducido en la pérdida de soberanía, en la priorización al pago de la deuda, en la concesión de grandes beneficios a las transnacionales y, consiguientemente en la eliminación de políticas de bienestar social, en la reducción del ingreso de las mayorías trabajadoras y en la afectación de los intereses de las clases medias, de los obreros y de los campesinos.

En la medida en que la política neoliberal ha fracasado en la solución de los problemas económicos de nuestra región y no ha sido capaz de generar condiciones de crecimiento económico y estabilidad, lleva a otorgar nuevas concesiones al capital transnacional: mayores facilidades a la inversión extranjera directa, mayor apertura económica, acuerdos económicos bilaterales, para estimular el flujo de inversiones a nuestros países y retomar o impulsar condiciones de crecimiento que solamente pasan a favorecer a los sectores hegemónicos.

Las políticas neoliberales llevan a nuestras economías a especializarse de nuevo en torno a las ventajas comparativas (recursos naturales y procesos productivos basados en el uso intensivo de la mano de obra) para encarar el proceso de competencia y de inserción en la economía mundial. Al centrarse el crecimiento en estos sectores, se acentuarán indefectiblemente la dependencia y el atraso de nuestras economías respecto a la de los países desarrollados. En consecuencia, tal proyecto no es sino la subordinación de las economías latinoamericanas al proyecto de reestructuración global que comandan los países desarrollados y en especial los sectores hegemónicos de la economía norteamericana.

En este proyecto se combinan nuevos y viejos métodos de penetración e injerencia, de reestructuración hegemónica de Estados Unidos con el continente: la "Iniciativa para las Américas", la invasión a Panamá para asegurar el control del Canal y del país, el estrangulamiento de Nicaragua por una guerra impuesta, el bloqueo y la amenaza contra Cuba, los intentos de mediatización de los procesos de solución política negociada en Centroamérica para dismantelar los movimientos democráticos y la preparación de la "guerra andina" con el pretexto del narcotráfico.

Todas son medidas para reconstruir en la región la zona de dominación económica y geopolítica de Estados Unidos, la "fortaleza americana", amarrando a los países latinoamericanos a una nueva y mayor subordinación consentida por sus gobiernos.

Es indispensable pensar en nuestra alternativa propia, con nuevos supuestos y criterios, a fin de evitar que las relaciones económicas con los países imperialistas y los mecanismos del mercado profundicen las diferencias existentes y perpetúen el subdesarrollo, la dependencia y la integración subordinada y pasiva con los países desarrollados.

Ante los enormes desafíos que tenemos por delante no podemos pensar que el mejor camino para los países de América Latina y el Caribe sea el de continuar cada uno por su lado, atendidos a sus propios esfuerzos y desatendiendo nuestras raíces comunes y las condiciones comunes que hoy viven nuestros países frente al mundo desarrollado. La solución de fondo a las dificultades y problemas se encuentra hoy en la transformación profunda de nuestras sociedades y en la integración política y económica de América Latina y del Caribe que ha sido durante siglos incentivo en las luchas libertarias y constituye ahora idea motora para impulsar nuestra cabal emancipación frente al proceso de reestructuración del capitalismo a nivel mundial para poder contribuir a forjar un nuevo orden internacional que respete nuestros valores nacionales y satisfaga las necesidades de nuestros pueblos.

Avanzar hacia esa meta solo será posible si se establecen en nuestros países Estados democráticos e independientes y Gobiernos comprometidos con la

transformación, sustentados en un fuerte apoyo y una decisiva participación de sus pueblos. Este tipo de respaldo sólo pueden darlo, en nuestros días, sociedades justas, democráticas y organizadas.

En dicho proceso deberán tener participación fundamental los sectores afectados por el modelo neoliberal, es decir, los trabajadores de la ciudad y del campo, la pequeña y mediana burguesía, los empresarios nacionalistas, amplios sectores de mujeres y jóvenes, las nacionalidades y etnias oprimidas, al igual que los sectores más desprotegidos de la sociedad.

En el campo económico, se trata de que la organización democrática de la sociedad defina las funciones del mercado y la participación del Estado en la vida económica. Ello deberá hacerse en una perspectiva antimonopólica y de justicia social. Este será uno de los contenidos de nuestras propuestas democráticas en la lucha por ser gobierno y poder.

Sobre esa base se podrán alcanzar y consolidar en cada uno de nuestros países, los objetivos y valores comunes: democracia económica, política y social; respeto al voto y a la participación política directa y permanente del pueblo; pluralismo; derechos ciudadanos; derechos humanos; derechos sociales; reformas estructurales y reforma agraria; organización democrática e independiente del pueblo; protección de la naturaleza; respeto y promoción de la identidad cultural y nacional de los pueblos originarios de nuestro continente; solidaridad social y soberanía nacional.

A partir de la constatación de los límites de los procesos democratizadores en América Latina, los debates del foro apuntaron hacia la reafirmación de su compromiso con la democracia económica, política y social, que consideramos un valor permanente en todos los momentos de lucha.

Las discusiones plantearon la necesidad de articular las dimensiones económica, cultural y social de la democracia con su dimensión política. Los valores de igualdad y de justicia social son así inseparables de la libertad.

Para que esta democracia pueda constituirse y desarrollarse, es de fundamental importancia que los trabajadores y los sectores populares tengan en este proceso un rol protagónico decisivo. Una democracia, como proceso abierto de creación de nuevos derechos incorpora necesariamente reivindicaciones y alternativas que son presentadas por el movimiento de mujeres, por los que luchan por la preservación del medio ambiente, por los jóvenes, por las nacionalidades y etnias – minorías o no – que sufren la opresión y discriminación en nuestras sociedades.

Al defender a la democracia para la sociedad y para el Estado estamos a la vez defendiendo a la democracia en el interior de los partidos, de los sindicatos y de todas las organizaciones sociales.

En este marco, la educación política es una necesidad al interior de los partidos, pero particularmente una responsabilidad ineludible de éstos con la sociedad, lo que replantea los términos en que aquella debe concebirse y realizarse.

Por lo tanto, esta educación política debe contribuir a la democratización de nuestras sociedades, y de manera relevante a la de nuestros partidos y organizaciones, aportando elementos para la generación de una nueva cultura política.

Las organizaciones y partidos políticos que participaron en el II Encuentro han coincidido en la necesidad de continuar discutiendo la búsqueda de políticas alternativas a los modelos neoliberales hoy predominantes en nuestra región. En esta búsqueda nos comprometemos a emprender iniciativas políticas conjuntamente con partidos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de otros países y

regiones del mundo a fin de luchar por un nuevo orden económico y político basado en la justicia, la equidad y la reciprocidad.

Los participantes en este II Encuentro, hemos acordado una serie de eventos que permitan darle continuidad al intercambio de opiniones sobre la actual temática latinoamericana:

- 1.- Un seminario sobre proyectos alternativos de integración latinoamericana, con la participación de especialistas, sindicalistas y dirigentes políticos latinoamericanos (febrero de 1992).
- 2.- Realizar el III Encuentro de los Movimientos y Partidos Políticos del Foro de São Paulo, para continuar el intercambio de experiencias y la discusión política y las conclusiones generadas en el seminario (junio de 1992).
- 3.- Efectuar un foro sobre el diálogo Norte-Sur, a realizarse en alguna capital europea.
- 4.- Celebrar un foro sobre América Latina y el nuevo orden mundial a realizarse en Estados Unidos.
- 5.- Enviar delegaciones de destacados dirigentes políticos latinoamericanos a distintos foros nacionales, regionales e internacionales a fin de presentar las conclusiones de nuestros eventos.
- 6.- Estimular, participar y respaldar todos los programas alternativos a las conmemoraciones oficiales del V Centenario del denominado Descubrimiento de América.

El II Encuentro acuerda, asimismo, formar un grupo de trabajo encargado de consultar y promover estudios y acciones unitarias alrededor de los acuerdos del Foro, integrado por las siguientes organizaciones:

Partido de los Trabajadores del Brasil, Izquierda Unida del Perú, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, Frente Sandinista Nacional de Nicaragua, Partido Comunista de Cuba, Frente Amplio del Uruguay, Partido de la Revolución Democrática de México, Movimiento Lavalás de Haití y Movimiento Bolivia Libre.

México - DF, 12-15 de Junio 1991.